



Boletín de Antropología Universidad de
Antioquia

ISSN: 0120-2510

bolant@antares.udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Colombia

Soto Aguirre, Johnatan Andrés

Narcoparamilitarismo, economía ilícita y orden social en el municipio de Itagüí, Antioquia:
mujeres, niños y jóvenes en la compleja dinámica de lo local

Boletín de Antropología Universidad de Antioquia, vol. 30, núm. 50, 2015, pp. 148-169

Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55743108008>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Narcoparamilitarismo, economía ilícita y orden social en el municipio de Itagüí, Antioquia: mujeres, niños y jóvenes en la compleja dinámica de lo local

Johnatan Andrés Soto Aguirre
Antropólogo de la Universidad de Antioquia
Dirección electrónica: ezsotto@gmail.com

Soto Aguirre, Johnatan Andrés (2015). "Narcoparamilitarismo, economía ilícita y orden social en el municipio de Itagüí, Antioquia: mujeres, niños y jóvenes en la compleja dinámica de lo local". En: *Boletín de Antropología*. Universidad de Antioquia, Medellín, vol. 30, N.º 50, pp. 148-169.
DOI: <http://dx.doi.org/10.17533/udea.boan.v30n50a06>
Texto recibido: 16/10/2014; aprobación final: 17/04/2015

Resumen. La confluencia de diferentes actores armados a lo largo de la historia reciente de Itagüí, en un proyecto narcoparamilitar más o menos hegemónico, ha permitido actualmente la consolidación y el control de la economía ilícita del narcotráfico en todo el territorio municipal, y ha generado un orden social sustentado en la diferencia (validada en la distancia con los agentes del narcotráfico) y en un importante arraigo social en los barrios. El propósito de este artículo es comprender la dinámica del narcotráfico en Itagüí, al superar el esquema explicativo que ve a las bandas como entidades insulares o pandillas desvinculadas de estructuras más amplias, y a los jóvenes como los únicos participantes de las redes del narcotráfico; de este modo, se dimensionará la magnitud de la economía ilícita en el ámbito municipal.

Palabras clave: narcotráfico, economía ilícita, ilegalidad, narcoparamilitarismo.

Narcoparamilitary, illicit economy and social order in the municipality of Itagüí, Antioquia: women, children and youth in the complex dynamics of the local

Abstract. Throughout the recent history of the Colombian city of Itagüí, there has been a confluence of various armed groups in a *narcoparamilitary project*, considered roughly as hegemonic. Nowadays, this situation enables the consolidation and control of the illicit drug-based economy in the entire municipality,

creating a social order sustained by *difference* (validated in the distance with drug agents) and operating with important social ties in the neighborhoods of the city. The purpose of this article is to understand the dynamics of drug trafficking in Itagüí, surpassing the explanatory scheme of criminal bands like island entities or gangs unrelated to larger structures, proposing to overcome the idea that young people are the only participants in the drug trafficking networks, sizing the magnitude of the illicit economy in the city.

Keywords: drug trafficking, narcoparamilitary, illegality, illicit economy.

Narco-paramilitarismo, economia política e ordem social na municipalidade de Itagüí, Antioquia: mulheres, crianças e jovens na complexa dinâmica local

Resumo. A confluência de diferentes atores armados ao longo da história recente de Itagüí, no projeto narco-paramilitar mais ou menos hegemônico, permitiu na atualidade a consolidação e o controle da economia ilícita do narcotráfico em todo o território da municipalidade, gerando uma ordem social baseada na diferença (validada na distância com os agentes de narcotráfico) e em um importante enraizado social nos bairros. O propósito deste artigo é compreender a dinâmica do narcotráfico em Itagüí, ao ir além do esquema explicativo que vê aos grupos como entidades separadas ou desintegradas de estruturas maiores, e aos jovens como os únicos participantes das redes do narcotráfico; assim, se dimensionará a magnitude da economia ilícita no âmbito municipal.

Palavras-chave: narcotráfico, economia ilícita, ilegalidade, narco-paramilitarismo.

Introducción

El narcotráfico continúa siendo un tema central en los debates nacionales. Hoy, cuando se está ante la inminente firma de un acuerdo de paz con las FARC-EP, uno de los temores que gravita en torno al proceso es la posibilidad de que se generen grupos *posdesmovilización* interesados en continuar con el negocio del narcotráfico, tal y como sucedió con el reciente proceso de desmovilización y reinserción paramilitar entre el 2005 y el 2007, de donde “surgieron” los actuales actores que controlan la ilegalidad y la criminalidad en el país.

Aunque el carácter ilegal del narcotráfico impide dimensionar con certeza su tamaño y las cifras que existen al respecto son más propias de la fantasía que de un conocimiento bien fundado (López, 2008: 9), las cifras oficiales indican que anualmente el lavado de recursos provenientes del narcotráfico asciende aproximadamente a unos ocho mil millones de dólares (Revista Semana, 2013), a pesar de que se ha librado una prolongada guerra contra los cultivos ilícitos y contra las organizaciones ilegales que los promueven.

Diferentes analistas coinciden en señalar que el narcotráfico, además de potenciar la capacidad de las organizaciones criminales, ha infiltrado todos los niveles de la vida social nacional (Camacho, 1992; Thoumi, 1999; López, 2008; Garay, 2010; López, 2010; Duncan, 2013) y ha generado múltiples efectos que, en última instancia, han devenido en una cultura de la ilegalidad, un descrédito de las instituciones y una economía donde la frontera entre lo ilegal y lo legal se difumina rápidamente.

Estos análisis han demostrado la magnitud de los alcances del narcotráfico en la sociedad, realizando un análisis macro al examinar diversos fenómenos, como las variaciones irregulares en el comportamiento electoral por regiones, las crisis políticas de los últimos años (el proceso ocho mil, la parapolítica), la relación entre narcotráfico y corrupción, la reconfiguración del Estado por la cooptación del crimen organizado y la lucha contra la producción y el tráfico de drogas.

En el caso específico del departamento de Antioquia,¹ los análisis desde las ciencias sociales y la producción literaria alrededor de las relaciones microsociales “afectadas” por el narcotráfico han sido profusas: desde el estudio de la violencia juvenil (Marín y Martínez, 1991) y las subculturas del narcotráfico (Salazar y Jaramillo, 1992), pasando por el análisis de la relación muerte, memoria e identidades juveniles (Riaño, 2000, 2007), hasta llegar al estudio de las conflictividades urbanas, dando prioridad a lo subjetivo (Blair *et al.*, 2008). Dichos análisis prestan especial atención a un solo grupo etario: los jóvenes; y a un solo elemento de la red del narcotráfico: los cinturones de seguridad juvenil del negocio. Este énfasis impide ver con precisión los efectos del tráfico de estupefacientes y la organización de la que se vale para operar en los territorios municipales, al soslayar asuntos importantes como la participación de otros grupos etarios, el funcionamiento de la economía ilícita y la configuración de órdenes sociales cimentados en relaciones con los agentes del narcotráfico en lo local.

Los nuevos escenarios de violencia y penetración del narcotráfico obligan a sobrepasar el esquema explicativo que ve a las bandas como entidades insulares o pandillas desvinculadas de estructuras más amplias; igualmente, hacen necesario superar la idea de que los jóvenes son los únicos participantes de las redes del narcotráfico, de modo que se pueda dimensionar la magnitud de la economía ilícita en el ámbito municipal.

En la presente investigación, la información se obtuvo mediante entrevistas a integrantes de las redes del narcotráfico durante los meses de junio a diciembre del 2014, así como por medio del análisis de información oficial y de organizaciones sociales, y de la revisión bibliográfica sobre el tema en el municipio de Itagüí. El objetivo de la investigación es aportar a la construcción de una mirada que reconozca la compleja relación entre las organizaciones ilegales y las comunidades en los nuevos escenarios del crimen organizado.

1 El departamento de Antioquia ha estado vinculado directamente a la dinámica del narcotráfico al haber sido epicentro de las actividades del Cartel de Medellín, y del accionar paramilitar y de organizaciones de alcance internacional como la Oficina de Envigado. El departamento de Antioquia todavía ocupa un papel relevante en el panorama nacional del narcotráfico; tiene importantes cultivos de coca en las regiones del norte, nordeste y bajo Cauca; y continúa conservando importantes rutas de salida de narcóticos hacia otros países: 1. El puerto de Turbo, hacia los Estados Unidos, por Panamá, y 2. El nororiente del departamento, hacia Europa o Miami, por Venezuela (Aguirre, 2010).

Contextualización del municipio de Itagüí

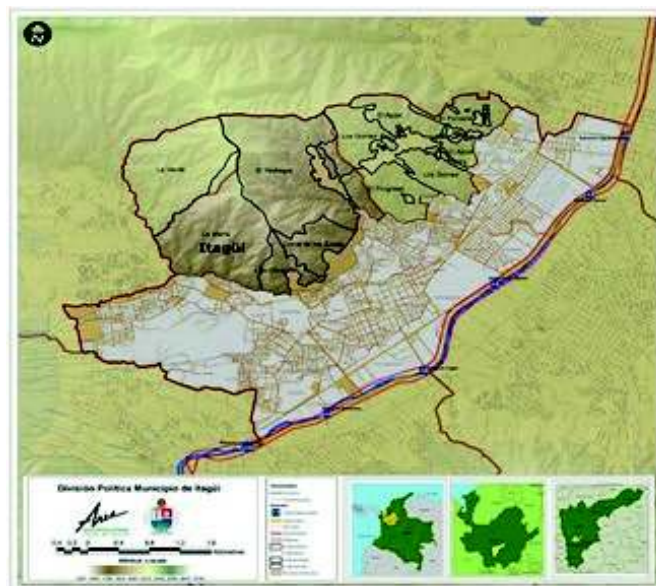


Figura 1 Mapa del municipio de Itagüí

Fuente: Secretaría de Gobierno, municipio de Itagüí (2014).

Itagüí está ubicado al sur del valle de Aburrá, a 11 kilómetros de distancia del centro de Medellín. Es el tercer municipio más pequeño de Colombia (tiene una extensión de 21 km²) y está dividido en seis comunas y un corregimiento.² Cuenta con una población aproximada de 255.369 habitantes (DANE, 2005).

Itagüí aún es reconocido como la capital industrial de Colombia y es el municipio más industrializado en el rango de los municipios no capitales del país (Alcaldía municipal de Itagüí, 2013). Hasta hace apenas 10 años —lo que permite dimensionar que la industria se ha convertido en un elemento identitario de la población—, el plan municipal de cultura contemplaba la creación de museos industriales, lugares donde se salvaguardaría y rendiría homenaje a la pujanza de los itagüiceños.

Aunque el municipio posee un alto desarrollo industrial, en el año 2010 registró una tasa de desempleo del 15% y una tasa de informalidad laboral del 51%. La tasa de analfabetismo municipal alcanzó el 4,9% en 2005 (DANE, 2005), aunque,

² El corregimiento El Manzanillo está dividido en ocho veredas: El Pedregal, El Ajizal, Los Gómez, Los Olivares, Los Zuleta, El Progreso, La María y El Porvenir, y concentra el 9% de la población.

de acuerdo con la Secretaría de Educación, se redujo al 2,8% en el año 2011. Hoy Itagüí es un abanderado de la educación con énfasis en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El censo nacional del 2005 (último censo realizado en el país) midió la incidencia de la pobreza multidimensional (IPM), al diferenciar la incidencia en zona rural y urbana,³ y se determinó que el 20,7% de la población urbana y el 46,1% de la población rural es pobre. Es decir, el 23,14% de la población del municipio es pobre, según el IMP.

Tabla 1 Pobreza en el municipio de Itagüí según IPM

Zona urbana				Zona rural			
Población urbana, censo 2005	Población urbana pobre por IMP	Incidencia	cve ¹	Población rural, censo 2005	Población rural pobre por IMP	Incidencia	cve ¹
213.187	44.187	20,7%	0,007	21.786	10.048	46,1%	0,008

Fuente: DANE (2005).

En esta misma línea, de acuerdo con la investigación realizada por la Universidad de Antioquia en 2013 sobre el Índice de Calidad de Vida (ICV)⁴ desagregado por comuna, a partir de los datos recolectados por el Área Metropolitana, el municipio de Itagüí tiene un ICV inferior a la comuna con menor ICV de Medellín, la 13.

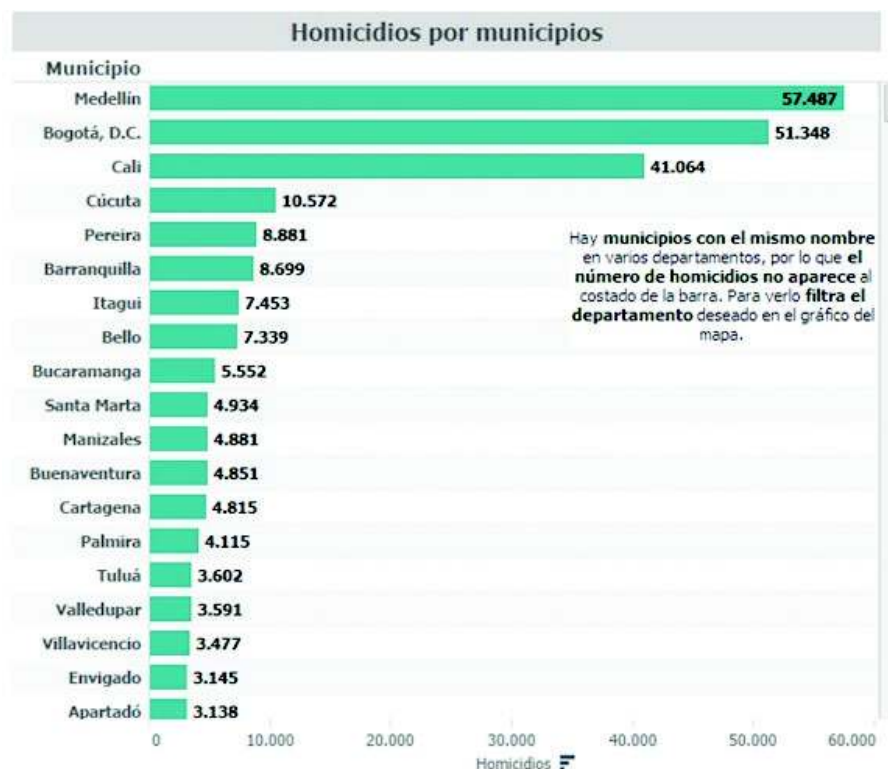
Itagüí, además, fue la primera ciudad no capital del país con el mayor número de homicidios entre 1990 y 2013, cuando se registraron 7.453 homicidios, según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). El municipio ha sido foco de la violencia ejercida por múltiples grupos (guerrillas, paramilitares, narcos); así, durante los últimos 10 años la confrontación entre grupos con intereses en el control de las rentas provenientes del narcotráfico ha generado más de 1.500 muertes por homicidio (ver figura 2). Durante el 2009, incluso, Itagüí tuvo la tasa más alta de homicidios del valle de Aburrá, por encima de la ciudad de Medellín.⁵ Esta misma violencia provocó el desplazamiento forzado, hacia fuera del municipio, de 2.324 familias en la última década (UARIV, 2014). En los últimos cinco años el desplazamiento forzado intraurbano ha sido de 97 familias (Personería Municipal de Itagüí, 2014).⁶

3 Las seis comunas que conforman la zona urbana del municipio concentran el 91% de la población.

4 El ICV considera variables como: características del hogar, número de miembros de la familia, servicios de vivienda, capital humano, seguridad social y calidad de la vivienda.

5 El informe de Derechos Humanos de 2009, del IPC, afirmaba: “Itagüí se ubica como el municipio con la tasa de homicidios más alta de la región, por encima de Medellín” (117).

6 La Personería Municipal de Itagüí no cuenta con registros de mayor antigüedad.

Tabla 2 Homicidios por municipios en Colombia

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2014).

Narcotraficantes en Itagüí: del Cartel a los grupos posdesmovilización AUC

Para entender la presencia actual del narcotráfico en Itagüí, debe considerarse la historia reciente de organizaciones ilegales de carácter metropolitano a finales del siglo xx e inicios del xxi, y entender por qué estas diversas manifestaciones confluyeron en un proyecto más o menos hegemónico, que hoy controla la producción, distribución y consumo de estupefacientes.

Las confrontaciones, negociaciones, fragmentaciones, desmovilizaciones, los nuevos pactos, el rearme y la permanencia del interés por controlar los recursos provenientes de la economía ilícita son algunos de los fenómenos que han permitido la existencia de escenarios inestables entre las diferentes expresiones del crimen organizado. El narcotráfico existe independientemente de las formas que asume (carteles, oficinas, paramilitares): no se trata de un ente trascendental de tipo

hegeliano, que se va transformando, sino que el negocio subsiste independiente de la forma que toma (Camacho, 2011).

El Cartel de Medellín⁷ surgió a finales de la década de los setenta, cuando pequeños traficantes de droga, que compraban la base de coca en Perú y la procesaban en Medellín, decidieron agruparse para obtener mayores réditos. El Cartel tuvo su gran apogeo a finales de la década del ochenta, momento en el que los traficantes decidieron cultivar la hoja de coca en departamentos como Meta y Caquetá, obteniendo mayores ganancias (López, 2010: 203). En su inicio, la empresa ilegal liderada por Pablo Escobar contó con el apoyo de los hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Lehder como socios capitalistas (Aguirre, 2010: 202). Las exageradas ganancias que entregaba el tráfico de droga convirtió al Cartel de Medellín en una de las organizaciones más poderosas del departamento de Antioquia y algunos de sus miembros comenzaron a figurar en la lista de los hombres más ricos del planeta.

Desde la década de los años ochenta, Itagüí fue bastión del Cartel de Medellín. Los hermanos Mario y Fernando Galeano, cercanos a Pablo Escobar e integrantes del Cartel, dinamizaron el negocio del narcotráfico (principalmente cocaína) y constituyeron grupos de sicarios al servicio de tal organización en el municipio (La Rotta y Morales, 2009: 84), aprovechando la existencia de grupos armados, denominados “bandas”, que ya estaban asentados en los barrios de Itagüí⁸ (Medina, 2006).

El narcotráfico promovido por el Cartel de Medellín catalizó el potencial delincuencial de bandas como La Unión, El Rosario y Calle 15, que se dedicaban a pequeños robos, al facilitarles armas, entrenamiento y financiación. Barrios como El Rincón, La Unión, Playa Rica, San Pío, San Gabriel y Simón Bolívar, entre otros, fueron reconocidos a finales de la década del ochenta y principios de los noventa como canteras del sicariato y como territorios del Cartel.⁹

Es conocida por la opinión pública la historia de Diego Fernando Murillo Bejarano,¹⁰ alias “Don Berna”, quien forjó su emporio ilegal en Itagüí, después de

7 Organización de narcotraficantes que aglomeraba un conjunto de subgrupos denominados “clanes”, bajo la coordinación de Pablo Escobar Gaviria.

8 Las denominadas “bandas” eran organizaciones que, según el Investigador Gilberto Medina, del IPC, evidenciaban dos fenómenos: 1. Incipientes niveles de organización delictiva en los ochenta; y 2. Una tradición de autodefensa de los habitantes de los barrios populares, germen de las futuras milicias y narcotraficantes (2006: 27-28).

9 Los nombres de los barrios y bandas fueron suministrados por personas entrevistadas durante julio y noviembre del 2014.

10 “Oriundo del Valle del Cauca llega a Itagüí en la década de la ochenta como integrante del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación EPL y pasa a formar parte del Clan Galeano en cabeza de Fernando Galeano alias Kiko, después de que el grupo del que hacía parte fuera eliminado por un grupo de narcotraficantes de Medellín. Murillo Bejarano recibió un atentado por parte de

que Pablo Escobar asesinara a los Galeano en la cárcel La Catedral, en 1992, por la pérdida de varios millones de dólares de una caleta ubicada en el barrio San Pío (sur del municipio de Itagüí), además de por el apoyo que estos les brindaban a las autodefensas y su no colaboración para “tumbar” la extradición de nacionales (Serrano, 2009: 123). “Berna” trabajaba para los Galeano, pero la muerte de estos, y la alianza con clanes opuestos a los de Pablo Escobar al interior del Cartel de Medellín, le permitieron tomar el control de hombres armados y redes de narcotráfico instaladas en Itagüí a comienzos de los noventa (Verdad Abierta, 2008).

“Don Berna” participó en la alianza entre agentes del Estado, el Cartel de Cali, los jefes paramilitares (Fidel y Carlos Castaño) y los clanes del Cartel de Medellín para asesinar a Escobar. Después de la muerte del capo, en 1993, “Berna” asumió un lugar sobresaliente en la organización denominada la Oficina de Envigado.¹¹

La Oficina de Envigado fue un mecanismo de control ideado por Escobar y sus socios para cobrar tributos a los clanes que hacían parte del Cartel y para ejecutar a quienes se le oponían (El Espectador, 2011). Murillo Bejarano tomó el control de todas las bandas que convergían en la Oficina con el apoyo, desde Urabá y en las entrañas de la ciudad de Medellín, de los hermanos Fidel,¹² Carlos y Vicente Castaño; desde el bajo Cauca lo apoyó Ramiro Vanoy (alias “Cuco”), y desde el Magdalena Medio lo apoyó Ramón Isaza; además, usó de mampara las Cooperativas de Seguridad (Cívico, 2009). “Berna” y sus aliados llevarían a cabo la reconfiguración del Cartel para mantener la producción y las rutas del narcotráfico.

El éxito de la confluencia entre Estado, paramilitares y narcotraficantes en los denominados PEPES (“Perseguidos por Pablo Escobar”), se reprodujo. “Don Berna” pasó de ser un narcotraficante raso, a ser el comandante del “Bloque Cacique Nutibara” (BCN), grupo paramilitar que confrontaría a las milicias que hacían presencia en el departamento de Antioquia. Para tal propósito, se adjudicó el alias de “Adolfo Paz” y continuó usando los escuadrones sicariales que había heredado del Cartel de Medellín. Como lo señala Romero, los narcotraficantes y paramilitares confluyeron con la anuencia del Estado:

un grupúsculo guerrillero llamado ‘Estrella Roja’, quienes llegaron hasta la taberna 15 Letras, en Itagüí, y le ametrallaron. A pesar de que recibió 17 tiros, sobrevivió. La venganza fue atroz. Entre 1984 y 1985 fueron asesinadas por lo menos doce personas tanto en Itagüí como en la Universidad de Antioquia [...]” (Verdad Abierta, 2008).

11 Envigado es un municipio ubicado al sur del valle de Aburrá y limita con Itagüí al occidente. Su historia reciente ha estado estrechamente ligada al Cartel de Medellín y a la Oficina de Envigado.

12 “Don Berna” afirmó haber conocido a Fidel Castaño en Itagüí, en 1986: “A Fidel Castaño lo conozco por medio de uno de sus primos llamado Luis Ángel Gil, en una pesebrera del municipio de Itagüí, donde hoy en día está ubicado un almacén de Carrefour, eso fue a finales de 1986” (Serrano, 2009: 119).

Las dimensiones regionales del fenómeno paramilitar se mezcló con el del narcotráfico; estos dos aspectos que necesariamente no tendrían que coincidir, terminaron apoyados mutuamente, con colaboración, promoción o tolerancia de la estructuras estatales encargadas de preservar el Estado de Derecho.¹³ (2007: 407)

Para que la amalgama entre las Fuerzas Armadas y los narcoparamilitares estableciera el control territorial total en el valle de Aburrá, el Bloque Cacique Nutibara no solo tuvo que enfrentar a las milicias urbanas, sino que también tuvo que aniquilar a un par ideológico: el Bloque Metro, organización comandada por alias “Doblezero”, que comenzó a operar en Antioquia desde 1997 como estrategia nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Cubides, 2005).

Entre 1999 y 2002, el Bloque Cacique Nutibara sembró el terror en toda el área metropolitana y el número de homicidios en Itagüí reportó una de las cifras más altas en la historia del municipio. En este intervalo de tiempo se presentaron 1.333 homicidios.

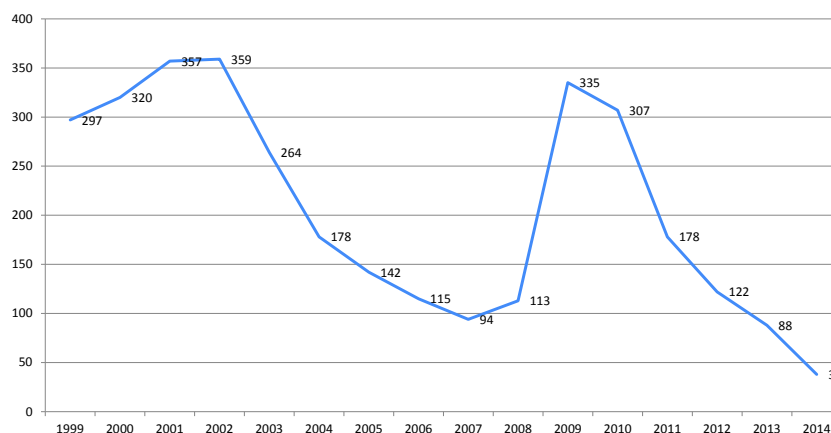


Figura 2 Estadística de homicidios en Itagüí (1999-2014)

Fuente: Secretaría de Gobierno, municipio de Itagüí (2014).

La ofensiva militar de la alianza entre los narcoparamilitares y el Estado pretendía controlar todo el valle de Aburrá para posteriormente ingresar a un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación de los combatientes. En 2003, el

13 Deben tenerse en cuenta también las afirmaciones que el mismo Romero hace frente a la confluencia narcoparamilitar: “[...] estas organizaciones encubrían una contrarreforma al proceso de democratización política iniciado en Colombia en 1982, no puede perderse de vista, sin importar el acento del análisis, el momento de transición político en el cual surgieron estos grupos” (2000: 21).

BCN se desmovilizó y se convirtió en el modelo piloto de desmovilización para el desmonte de las estructuras paramilitares en todo el país. Anteriormente, el 29 de noviembre del 2002, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habían decidido acogerse a un proceso de desmovilización y se había declarado unilateralmente el cese de hostilidades. El Gobierno nacional, en respuesta a esta decisión, nombró una comisión de seis personas para explorar la posibilidad de adelantar una política de diálogo. Como resultado de este acercamiento, se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, en julio del 2003,¹⁴ y a partir de ese momento comenzó el desmonte gradual de 38 estructuras armadas, con 31.671 desmovilizados y 18.051 armas entregadas (López, 2010).

Un hecho clave para entender la violencia y permanencia del narcotráfico en Itagüí sucedió en 2003. Cuando se dio la desmovilización del BCN, los mandos medios y la mayoría de las armas no fueron entregadas. En esos mismos días, varios de esos combatientes fueron enviados al municipio de San Carlos, donde comenzó el rearme. La Oficina de Envigado, entonces, articuló el conocido Bloque Héroes de Granada (BHG), que, en lo fundamental, estaría al servicio del narcotráfico (Verdad Abierta, 2007).

La creación del BHG permitió a los narcoparamilitares tener el control de los 45 municipios antioqueños dominados por el aniquilado Bloque Metro y garantizar el control sobre el valle de Aburrá, después de la falsa desmovilización del BCN. Dicho de otro modo, el BHG fue la organización por medio de la cual se reestructuró la alianza narcoparamilitar para mantener el control en buena parte del departamento de Antioquia, después de iniciado el proceso de desmovilización.

Lo descrito hasta aquí coincide con la información suministrada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), donde se indica que un gran número de personas desmovilizadas de estructuras paramilitares, en Itagüí, durante el proceso comprendido entre 2003 y 2007, procedían principalmente del Bloque Héroes de Granada y del Bloque Cacique Nutibara.¹⁵ El 30,4% pertenecía al primero y el 12,7% al segundo.

Cabe mencionar que, como consecuencia del control territorial hegemónico que logró la organización narcoparamilitar de la Oficina de Envigado a través del BHG y otras organizaciones ilegales, después de la batalla librada contra el BM y las milicias urbanas, en Itagüí (al igual que en todo el valle de Aburrá), las cifras de

14 En lo que se denominó el Acuerdo de Ralito, se planteó la desmovilización para el año 2005: “En el año 2004 se firma el acuerdo Ralito 2 donde se establece un área de reclusión para los jefes paramilitares. A finales de 2005 se comienza a aplicar la Ley de Justicia y Paz en el marco de la justicia transicional” (López, 2010: 42).

15 Según los datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), el total de personas desmovilizadas desde Itagüí fueron 79. La fecha de corte de los datos recogidos el 31 de agosto del 2014.

homicidios descendieron entre los años 2003 y 2008 (ver la figura 2). A este fenómeno se le denominó el “milagro de la seguridad”.

Sin embargo, después del 2008 la fase de relativa calma fue reemplazada por un incremento en la conflictividad. La Oficina de Envigado se fracturó después del fracaso del proceso de desmovilización paramilitar y la extradición de su cúpula a Estados Unidos. En el 2008, la extradición de su máximo líder, alias “Don Berna”, así como la muerte y entrega a la justicia norteamericana de otros integrantes de la Oficina de Envigado, generó una lucha interna por el control del monopolio criminal, protagonizada por Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”, y Erick Vargas, alias “Sebastián”.

Este conflicto, como lo señala el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, afectó al sur del valle de Aburrá:

La pugna entre alias “Valenciano” y alias “Sebastián” y otros grupos derivados del paramilitarismo en Antioquia, por el monopolio de la criminalidad en la ciudad de Medellín y sus municipios cercanos, como Bello, Itagüí, Caldas, Sabaneta y Envigado, ha generado un incremento sustancial de diversas formas de violencia directa como los homicidios, las amenazas, el desplazamiento forzado intraurbano, la vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes y violencias sexuales, entre otras. (OSHM, 2012: 22) [La cursiva no está en el texto original]

Durante el periodo comprendido entre el año 2008 y el 2011, en el municipio de Itagüí se registraron 933 homicidios, cifra muy cercana a las cifras registradas en el periodo 1999-2002 (ver la figura 2). Después del 2011, no obstante, en el municipio se estableció nuevamente una tensa calma y las cifras de homicidio disminuyeron hasta los 38 homicidios, en 2014, lo que representa la cifra más baja en la historia reciente.

Lo dicho hasta aquí deja entrever la continuidad de actores armados en Itagüí y el valle de Aburrá. Los actuales escenarios de confrontación y aparente tranquilidad solo pueden entenderse si se considera la prolongación temporal y la permanencia espacial de estructuras narcoparamilitares.

Así, el informe presentado en 2014 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), titulado *Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC*, brinda pistas para entender la actual situación de las estructuras narcoparamilitares en Antioquia e Itagüí:

A pesar de los contenidos de los acuerdos suscritos entre las AUC y el gobierno nacional, en relación con la entrega de rutas y el dismantelamiento del narcotráfico y otras economías ilegales, *es posible afirmar que el proceso de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) en Antioquia se erigió de acuerdo con intereses de redes criminales del narcotráfico y economías preexistentes en el departamento, de manera que tras el proceso de desmovilización permitieran enmascarar su actividad y continuar usufructuando rentas ilícitas.* [...]. Actualmente, en el departamento de Antioquia tienen incidencia

grupos armados ilegales (GAI) al servicio de las redes criminales con trayectoria en el departamento, con exparamilitares a la cabeza: *La Oficina de Envigado; la banda Los Paisas, extensión de la Oficina de Envigado; Los Urabeños y Los Rastrojos*. (186-187)
[La cursiva no está en el texto original]

Los intereses económicos del narcoparamilitarismo continúan operando, pues, y la aparente calma es el resultado del equilibrio de poderes entre actores ilegales vinculados a la larga trayectoria del poder criminal en el valle de Aburrá.

La seccional de investigación criminal MEVAL, de la Policía Nacional, registra diez grupos armados ilegales que continúan operando en el municipio de Itagüí a la fecha y que se detallan en la tabla 3.

Tabla 3 Distribución de bandas criminales en Itagüí

N.º	Banda	Comuna // Corregimiento	N.º	Banda	Comuna // Corregimiento
1	El Ajizal	Corregimiento	6	La Raya	Comuna 4
2	El Guayabo	Comuna 4	7	Calatrava	Comuna 5
3	El Pedregal	Corregimiento	8	La Unión	Comuna 6, 1 y 3
4	El Tablazo	Comuna 5	9	Villa Lía	Comuna 3
5	San Gabriel	Comuna 3	10	El Rosario	Comuna 6

Fuente: Dirección de Investigación Criminal e Interpol Seccional Medellín (2014).

Las ocho veredas que conforman la zona rural del municipio están controladas por Los Urabeños (Bandas El Ajizal y El Pedregal), y las seis comunas que conforman la zona urbana están bajo el control de la Oficina de Envigado (Aguirre, 2014). El pacto de fusil entre Urabeños y la Oficina de Envigado, firmado en julio del 2013 (CORPADES, 2015), ha permitido que el negocio del narcotráfico fluya sin inconvenientes en el municipio.

Economía ilegal del narcotráfico: mujeres, niños y jóvenes en la vuelta

La droga proviene de fuera del municipio de Itagüí y los grupos con injerencia departamental y metropolitana permiten que las rutas de distribución operen sin contratiempos. La droga llega a Medellín y de ahí se distribuye a todos los demás municipios del valle de Aburrá (Comunicación personal, noviembre del 2014). A Itagüí llega en camiones que la descargan en centros de acopio minorista: graneros, chatarrerías o verdulerías, que sirven de fachada. Allí la descargan como si fuera mercancía para el local comercial, en bultos o cajas de diferentes productos. Algunos taxis se encargan posteriormente de distribuirla desde los locales comerciales

fachada hacia las *casas* de empaque, lo que constituye la primera fase del proceso de manejo de estupefacientes en los barrios.

Dependiendo de la droga, se diseña un circuito de “producción” que en general consiste en desempacar, picar (o rascar), pesar, mezclar y empacar en determinadas cantidades o “dosis”. Una familia de aproximadamente ocho personas se encarga de cumplir con las subtarefas que demanda el circuito. En su mayoría, y contrario a la idea generalizada de que los jóvenes son los únicos participantes del negocio del narcotráfico, estas labores son desempeñadas por mujeres entre los 25 y 55 años de edad, en gran medida madres.

[...] son sobre todo mujeres, muchas que no tienen trabajo o que necesitan plata para pagar alguna vuelta, las que se encargan de hacer todo el proceso antes de sacar la merca pa’ [sic] la plaza; son casi siempre familias, se debe tener mucha confianza entre los que le entren, por el tema de la extinción de dominio [...]. Abuelas, primas, tías, cuñadas trabajan desde sus casas y se sacan lo del mes. (Entrevista personal, 13 de octubre del 2014)

Esta etapa del “trabajo” es la peor remunerada, pues las participantes reciben entre 600 y 700 mil pesos mensuales. Lo que ganan, de acuerdo con las mismas mujeres, alcanza para costear los elementos básicos del hogar (sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de una actividad que demanda todo el día de trabajo, puesto que cada casa debe abastecer al menos una plaza).

Es necesario mencionar que el 55% de las mujeres del municipio son desempleadas o están a cargo de tareas domésticas no remuneradas¹⁶ (Fundación Colombia Social, 2014), aspecto que coincide con los argumentos entregados por las entrevistadas, en relación con la necesidad económica como una de las circunstancias que las impele a subvalorar los riesgos que corren al hacer parte del negocio. Igualmente, las mujeres que poseen salarios bajos también pueden desempeñar actividades que demandan menos tiempo, como la venta directa de droga, el préstamo de sus cuentas bancarias, la realización de transacciones en las entidades financieras y la carga de droga o armas de un barrio a otro. De esta forma, se genera un sistema de doble ocupación femenina, donde la legitimidad del recurso obtenido proviene de la posibilidad que este permite para cubrir alguna necesidad. La racionalidad de la provisión de recursos no pasa por la dicotomía legal-ilegal:

Aquí todas tenemos obligaciones y una mujer hace por sus hijos lo que sea; Dios sabe que lo que hacemos lo hacemos por ellos. Si no pagamos arriendo, servicios y mercamos, nadie lo va a hacer; usted no sabe qué se siente levantarse y no tener nada pa’ [sic] darle a los niños. (Comunicación personal, 11 de agosto del 2014)

16 También es necesario mencionar que el 35% de las mujeres de Itagüí, en lo que concierne a formación académica, no estudiaron o solo alcanzaron la primaria, y un 37% son bachilleres (Fundación Colombia Social, 2014).

La visita a varias casas permitió constatar que mujeres de la tercera edad también participan en el circuito de producción. Se trata de abuelas entre los 60 y 80 años que se ocupan de empaclar y sellar las dosis de droga, actividad que hacen durante todo el día y que representa una importante fuerza de trabajo.

De las casas, la droga pasa a las *plazas* a través de niños de entre 7 y 12 años de edad. Ellos son los encargados de transitar por los barrios sin la amenaza de ser requisados o capturados por la policía; durante el día hacen varios viajes y reciben pequeñas sumas de dinero diarias, que hacen llegar a sus familias. Un niño de 12 años da el siguiente testimonio sobre la actividad:

[...] a uno sí le da miedo meterse en estas cosas, y la familia le dice a uno: no se meta en esas cosas, que deje las amistades, pero uno tiene muchos amigos en la vuelta y uno aprende cositas [...]. Yo soy el que lleva los *cosos* de un lugar a otro, usted sabe, y a mí la policía no me dice nada, me miran pero uno no da visaje y pasa, y los veinte pesos sirven mucho. (Comunicación personal, 23 de julio del 2014)

Las plazas funcionan todos los días de la semana; en algunas se trabaja desde las seis de la mañana hasta las diez u once de la noche y otras tienen servicio las veinticuatro horas. Cuentan con dos turnos al día y por cada turno se pagan entre 60 y 70 mil pesos diarios. Si las plazas permiten que las personas pernocten, se contratan dos personas por turno, una a cargo de administrar el dinero y otra a cargo del orden entre los consumidores. Las personas que hacen los turnos tienen derecho a desayuno y almuerzo.¹⁷ Para la preparación de las comidas se contrata a una familia del barrio.

Las plazas también suministran las *bombas*, paquetes que contienen diferentes sustancias para vender fuera de ella. Quien obtiene la bomba —alguien que debe tener la confianza del administrador de la plaza— debe pagarla después de efectuada su venta y recibe a cambio un porcentaje por cada dosis vendida. Para vender la bomba también se puede contratar a un *jíbaro* que se encargue de la venta directa. El que obtiene la bomba es un intermediario entre la plaza y el jíbaro. Este último es el contacto directo con el consumidor; al jíbaro se le paga un pequeño margen por dosis vendida y la mayor utilidad es para la plaza.

Las sustancias que se comercializan en el mercado municipal de estupeficientes son las siguientes:

17 Las personas entrevistadas señalan que las comidas dependían del “Duro”: “Unos la quieren toda y no sueltan nada, otros te pasan la liga, el almuerzo y te incentivan a trabajar” (Comunicación personal, octubre del 2015).

Tabla 4 Sustancias comercializadas en Itagüí

	Nombre	Sustancia y cantidad aproximada	Valor x unidad (en pesos colombianos)
1	Regular	Marihuana	\$1.000
2	Cripa	Marihuana con químicos	\$4.000
3	Casicripi	Combinación de regular y cripa	\$2.500
4	Blones	Marihuano grande	\$5.000
5	Perico	Cocaína (1 gr)	\$4.000
6	Roca	Cocaína en bloque (más de 1 gr)	Variable
7	Misil	Cocaína en recipiente de forma cilíndrica (entre 2 y 2,5 gr)	\$10.000
8	Bazuco	Mezcla de cocaína, marihuana y otras sustancias	\$2.000
9	Pepas	Rivotril, clonazepam, entre otros	\$2.000 a \$4.000
10	Ácidos	LSD	\$25.000

Fuente: entrevistas personales (2014).

Los negocios fachada, las casas, las plazas, las bombas y los jíbaros son “protegidos” por un cinturón de seguridad conformado por jóvenes de entre 14 y 22 años de edad. Al responsable por barrio de “cuidar” el negocio lo denominan “el Duro”, quien a su vez debe responder a otros niveles jerárquicos superiores:

Cada barrio tiene un líder, el Duro. Entre líderes se comunican. Esos líderes de los barrios tienen otros líderes; es como una pirámide y los líderes de mayor rango no están en Itagüí. Pueden estar en El Poblado, Envigado, Medellín [sic]. El líder se mantiene en la mitad de un círculo de 15 *pelaítos*, *pineando* o por el *Face*, para avisar [...], el combo de *pelaítos* está disperso, uno ya no ve el grupo de mariguaneros parchados [...], algunos andan *entolados*, uno sabe que están armados. (Comunicación personal, 4 de octubre del 2014)

Si alguien no paga la bomba, roba dinero, genera rencillas en las plazas, consume en lugares que pongan en evidencia los sitios de expendio, denuncia a implicados en el tráfico de droga, se comunica con la policía o transgrede las normas impuestas por los dueños del negocio, los cinturones de seguridad proceden a “restablecer” el orden favorable para el tráfico.

Estos cinturones de seguridad juvenil son la parte más visible de las estructuras del narcoparamilitarismo y por ello es habitual hallar copiosas referencias a *bandas* de jóvenes armados, hasta el punto de que se ha forjado un estereotipo acerca de ellos, que nubla los análisis sobre la violencia y las organizaciones del narcotráfico. Estos *combos* de jóvenes obedecen las órdenes de un grupo de sicarios profesionales que rondan los 28 y 35 años de edad, que a su vez obedecen órdenes

de los capos del negocio, aquellos que manejan el lavado de dinero en grandes cantidades, sobornan políticos, negocian con militares de alto rango, garantizan que el Estado no obstruya el negocio y permiten el acrecentamiento del poder político de las mafias (Duncan, 2013).

Los combos de jóvenes no controlan el monopolio de la violencia en ningún nivel de la organización, ni son autónomos en los territorios. El suministro de armas, la participación en la organización y el proceder bélico pasa obligatoriamente por la aprobación de escaños jerárquicos superiores.

Un ejemplo de la dependencia de los combos de jóvenes a estructuras más amplias lo sintetiza la opinión de un integrante entrevistado, al hacer alusión al pacto de paz entre agrupaciones ilegales: “Mire, hoy estamos en una supuesta paz, un pacto de cero muertos, el que mate a alguien lo tenemos que pelar, así sea de nosotros, pero en cuanto nos llamen y nos digan: den plomo, nosotros tenemos que dar plomo” (Comunicación personal, agosto del 2014).

Si bien el análisis de estas altas esferas de la criminalidad sobrepasa el alcance de este texto, es importante señalar que los combos de jóvenes, hoy, funcionan al servicio de estructuras mucho más amplias y no pueden entenderse como la iniciativa de un grupúsculo aislado que busca estatus o dinero fácil: los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico impiden que esas iniciativas pervivan en el tiempo si no son afines a los intereses del negocio. La vinculación de jóvenes, en los barrios y municipios, con el ejercicio de la violencia, pasa ineluctablemente por la demanda de hombres ejercida por el narcoparamilitarismo.

En promedio, en cada barrio hay tres plazas, que mensualmente pueden generar entre 25 y 30 millones de pesos cada una.¹⁸ Mensualmente, los grupos armados ilegales, solo por el narcotráfico municipal, pueden estar devengando sumas cercanas a los tres mil quinientos millones de pesos, lo que equivale anualmente a una suma aproximada de cuarenta y dos mil millones de pesos por el funcionamiento de 140 plazas en todo el municipio. Cada plaza lleva, a guisa de libro contable, un registro de los egresos e ingresos diarios.¹⁹

La dinámica barrial del narcotráfico en el municipio, considerando las casas productoras, las familias participantes, el personal de la plaza, los líderes barriales, los jóvenes que conforman los cinturones de seguridad, el manejo de cuentas bancarias, servicios de transporte, las inversiones en negocios como cafés internet, puestos de comida, almacenes, venta de perros y rifas informales, entre

18 Algunas plazas, por su ubicación, antigüedad y reconocimiento pueden generar entre 40 y 45 millones de pesos mensuales.

19 Debe aclararse que las personas que facilitaron las entrevistas no permitieron ver los libros o instrumentos que se usan para mantener el registro de los recursos que manejan las plazas. La obtención de estos datos se hizo de manera verbal.

muchos otros, puede generar ingresos directos mensuales a cerca de 200 personas por barrio.²⁰

La respuesta de un trabajador de plaza, ante la pregunta hipotética “¿es posible imaginar un Itagüí sin narcotráfico?”, deja entrever el nivel de penetración que esta actividad económica ha logrado en la sociedad itagüiceña:

Eso no se va a dar, hay mucha gente que vive de esto, si el narcotráfico se termina se queda mucha gente sin pagar los servicios o el arriendo, todo se va a volver un desorden porque no va a haber nadie que cuide el barrio y meta la mano cuando hay problemas entre los vecinos, barrio es barrio y los problemas no faltan [...], pero esto no se acaba porque la gente necesita y confía en nosotros. (Comunicación personal, 1.º de noviembre del 2014)

Orden social local y narcotráfico

Los efectos del narcotráfico no se limitan exclusivamente a incrementar la circulación de dinero en las económicas barriales y a “administrar” la violencia; el narcotráfico edifica un orden social jerarquizado, cimentado principalmente en los lazos de parentesco y en la cercanía con integrantes de los grupos.

Contrario a la ficción hobbesiana del Estado como regulador omnímodo de la vida social a través del monopolio de la fuerza y de la igualdad de todos los ciudadanos en el contrato social, lo que prima en los escenarios locales mediados por el narcotráfico es una diferenciación marcada entre quienes hacen parte (o son allegados) a agentes de las redes del narcotráfico y quienes no. El monopolio de la fuerza es compartido.

Ni siquiera los liderazgos instaurados por la institucionalidad logran llevar a cabo las funciones delegadas, o mantener incólume el estatus otorgado por la “legalidad”, sin mediación de los “muchachos”. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, las Juntas Administradoras Locales, los líderes comunitarios, todos, sin excepción, se ven abocados a considerar en su proceder la injerencia de agentes del narcoparamilitarismo en la vida comunitaria.

Las fiestas, los eventos políticos, las rencillas familiares, la no cancelación de las deudas, las relaciones con la autoridad policial y hasta las riñas amorosas son el nicho donde intervienen los hombres y las mujeres que salvaguardan el equilibrio social favorable al negocio del narcotráfico.

La regulación social a través del uso de la fuerza es demandada y usada por los habitantes cuando las circunstancias exigen “efectividad”, puesto que se consi-

20 En esta cifra coincidieron seis de las ocho personas entrevistadas, con un rango medio en la estructura municipal del narcotráfico.

dera que el Estado es lento en su proceder y que no tiene presente las necesidades inmediatas de la población:

Mi casa fue ocupada por un arrendatario que no pagaba el arriendo hace once meses; ni la Policía, ni el Gaula han podido sacarlo, dizque porque el hombre vive con una menor de edad y los derechos de los niños están por encima de los derechos de los adultos; entonces yo me pregunto ¿quién piensa en mis derechos? Nadie [...]. Yo recurrí a los muchachos del barrio para que me hicieran el favor de sacar al señor que estaba en mi casa, y en menos de quince días el señor ya estaba de patitas en la calle, eso fue efectivo, porque aquí la gente sabe que con esta gente sí es cosa seria. (Comunicación personal, 5 de diciembre del 2015)

Pero la aprobación del poder de los agentes del narcoparamilitarismo no se da solo por la instrumentalización de la violencia. El miedo infundado, el temor a represalias y el rechazo no preconizado conducen a un “dejar hacer para poder sobrevivir”:

Era el veinticuatro de diciembre. Finalizábamos las novenas con los niños. Teníamos casi cuatrocientos esperando regalo, la alcaldía envió noventa y ocho regalitos. Yo no sabía qué hacer. Cuando de un momento a otro se acercó un *pelao*, de esos que uno sabe que se mueven en esas cosas, y me paso un teléfono celular y me dijo: “Quieren hablar con usted”. Yo me asusté mucho, pero tomé el teléfono y un señor me dijo: “Vea, ahí le mando los regalos para los niños y unos dulces, siga haciendo su buena labor y cuente con nuestro apoyo”. Yo devolví el celular. A los quince minutos llegó un camión lleno de regalos y otro con muchos helados. Yo miré a todos los de la Junta y decidimos que lo mejor era recibirlos, no fuera a pasarnos algo. (Comunicación personal, 8 de junio del 2014)

El verdadero poder de los agentes del narcotráfico en el ámbito local está en haber logrado articular la capacidad de financiar la provisión de necesidades básicas de las comunidades con un accionar que no incluye decisiones en contra del Estado.

La distribución del poder y de los beneficios que puedan derivarse de la estructura municipal del narcotráfico se hace de manera desigual. Los familiares y amigos logran tener una mayor participación en las utilidades y el respaldo de los escuadrones de seguridad, mientras que quienes no tienen relación alguna se ven excluidos de estos beneficios.

De esta forma, el narcotráfico se instala y funciona en los barrios a partir de vínculos de parentesco y de fuertes lazos afectivos (Silva, 2004). Así, el valor de la confianza es esencial para que marche el negocio en los niveles bajos y altos de la estructura del narcotráfico. Al igual que en la economía informal, como lo señala Quijano, la identidad de grupo (regional, familiar, étnica) es el principal soporte de cohesión de la unidad de la actividad económica (1998: 92). Contrario a aquella visión de la organización mediada exclusivamente por la fuerza, en los barrios

podemos percibir estrechos lazos de confianza con integrantes de las agrupaciones ilegales:

En abril nos fuimos tres buses pa' [sic] Cartagena, muchos familiares de los muchachos y otros que trabajamos en cositas, que ayudamos y nos tienen confianza [...]; ellos no viajaron con nosotros, pero allá, jemmm, nos rifaron celulares, electrodomésticos y hasta una moto. Al final a mi hijo le dieron la liga, estaba muerto de la dicha, y a todos nos mandaron con aliguito. [...] no toda la gente del barrio participa porque ellos eligen quién va, y lo normal es gente que no se meta con ellos. (Comunicación personal, 17 de julio del 2014)

Los relatos mezclados de admiración, gratitud y respeto son frecuentes entre quienes hacen parte de las relaciones cercanas de los integrantes de los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, pues se reconoce el beneficio de dicha relación. Esta cercanía con los muchachos es de vital importancia, pues asuntos esenciales, e incluso la vida misma, pueden depender de ella:

Ellos no pueden matar a quien quieran, a mí por ejemplo el Ñato me tenía ganas, eso me veía y quería era comerme, darme piso de una; pero yo hablé con el Jetón, un amigo de hace años, y le dije que yo no había hecho nada, que ese *man* me la tenía montada y que yo no sabía por qué; entonces el Jetón habló con él y le dijo que pilas, que si me pasaba algo él iba a ser el primero en morirse. Por ahí pasa cada rato y me mira feo, pero no azara, ya no puede hacer nada y yo no le debo nada a nadie. (Comunicación personal, 6 de septiembre del 2014)

El valor de la confianza, los lazos de parentesco, la amistad y el uso de la violencia como factor decisivo cimientan las bases de un orden social local sustentando en la diferencia, que además restringe o habilita la “garantía de derechos”. Desconocer el orden social que se deriva del control territorial, la capacidad de subvenir necesidades básicas, las medidas de “protección” que se otorgan a cercanos, la administración de la violencia y el amedrentamiento latente, por parte de los grupos de narcoparamilitares, es obviar un elemento axial para entender las relaciones sociales en barrios y municipios del departamento. Itagüí, hoy, se halla bajo el poder en apariencia inexpugnable de una ilegalidad con fuerte arraigo social.

Conclusiones

Actualmente, la confluencia de diferentes actores armados a lo largo de la historia reciente de Itagüí, en un proyecto narcoparamilitar más o menos hegemónico, ha permitido la consolidación y control de la economía ilícita del narcotráfico en todo el territorio municipal. La dinámica económica del tráfico de estupefacientes en lo municipal y barrial ha logrado generar un enorme arraigo social, no exento de resistencias.

La instrumentalización de la violencia por parte de amplios sectores sociales, la participación de múltiples grupos etarios en los circuitos de producción y circulación de droga, la provisión de abundantes recursos a las precarias economías barriales, la generación de ingresos directos para un número considerable de familias, la administración compartida de la fuerza con agentes estatales y la continuidad en la toma de decisiones que no afecten la presencia estatal en los barrios, le permiten al narcoparamilitarismo establecer un orden social jerarquizado, sustentado en la diferencia y cimentado en el valor de la confianza y en los lazos de parentesco.

Las acciones estatales y los proyectos que desde la sociedad civil pretendan hacer frente al enorme poder económico, político y militar de los actuales grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, deben considerar las frágiles economías barriales, la estructura de oportunidades en lo local y la totalidad de la población. Seguir concentrando la mirada solo en los jóvenes y en las mal llamadas subculturas del narcotráfico es mirar de soslayo la verdadera magnitud del fenómeno del narcotráfico en los territorios.

Del mismo modo, debe reconocerse que las racionalidades de los sujetos inmersos en estas realidades no se mueven exclusivamente entre la dualidad legalidad-ilegalidad. La larga historia de violencia y la presencia de economías ilegales en el municipio, sumadas a la falta de oportunidades (reflejada esta última en la imposibilidad de acceder a recursos estables y considerables), han configurado poco a poco subjetividades dotadas de un sentido práctico que trasciende el lenguaje oficial.

Referencias bibliográficas

- Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) (2014). Información suministrada a través de oficio con radicado 022166 del 17 de octubre del 2014.
- Aguirre, Gisela (2010). *Trayectorias del paramilitarismo tras los acuerdos de paz*. Conciudadanía, Medellín.
- (2014). “Departamento de Antioquia: DDR y grupos armados ilegales pos AUC, actores en competencia armada”. En: Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá, Colombia, *Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia panorama posacuerdos con AUC*, pp. 179-264.
- Alcaldía municipal de Itagüí (2013). *Plan Integral de Prevención y Atención del municipio de Itagüí*. Itagüí.
- Blair, Elsa, Grisales, Marisol y Muñoz, Ana María (2008). “Conflictividades urbanas vs. guerra urbana: otra “clave” para leer el conflicto de Medellín”. En: *Universitas humanística*, N.º 67, pp. 29-54.
- Camacho, Álvaro (1992). “Narcotráfico y sociedad en Colombia. Contribución a un estudio sobre el estado del arte”. En: *Boletín Socioeconómico*, N.º 24, pp. 79-96.
- (2011). *Crimen y narcotráfico*. [Conferencia]. Presentada en: 25 años del Instituto Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. [En línea:] <https://www.youtube.com/watch?v=qWjoK1QdWPc>. (Consultada el 25 de octubre del 2014).

- Cívico, Aldo (2009). *No divulgar hasta que los implicados estén muertos. Las guerras de Doblezero*. Intermedio Editores, Colombia.
- CORPADES (2015). *Informe de seguridad. Pacto de fusil: emerge un nuevo jefe militar en el crimen urbano*. [En línea:] <http://analisisurbano.com/?p=14712>. (Consultado en marzo del 2015).
- Cubides, Fernando (2005). “Narcotráfico y paramilitarismo: ¿matrimonio indisoluble?”. En: Rangel, Alfredo (compilador), *El poder paramilitar*. Planeta, Bogotá, pp. 76-115.
- DANE (2005). *Plan estadístico del municipio de Itagüí*. Bogotá, Colombia.
- Dirección de Investigación Criminal e Interpol Seccional Medellín (2014). Información suministrada a través de oficio con radicado 01403 del 02 de octubre del 2014.
- Duncan, Gustavo (2013). “Una lectura política de Pablo Escobar”. En: *Co-herencia*, vol. 10, N.º 19, pp. 235-262.
- El Espectador (2011). *Todo empezó en Envigado*. [En línea:] <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/todo-empezo-envigado-articulo-250558>. (Consultado el 22 de febrero del 2015).
- Fundación Colombia Social (2014). Caracterización de las mujeres del municipio de Itagüí. Subsecretaría de Género del municipio Itagüí. Informe de Investigación. Itagüí, Colombia.
- Investigación Calidad de Vida (2013). Secretaría de Inclusión Social municipio de Itagüí. Julio del 2013.
- Garay, Jorge (2010). *Captura y reconfiguración cooptada del Estado en Guatemala, México y Colombia*. Método, Bogotá.
- IPC (2009). *El péndulo de la violencia: rupturas y continuidades del conflicto en Antioquia*. Instituto Popular de Capacitación (IPC), Medellín.
- La Rotta, Santiago y Morales, Natalia (2009). *Los PEPES. Desde Pablo Escobar hasta Don Berna, Macaco y Don Mario*. Planeta, Bogotá.
- López, Claudia (2010). Y refundaron la patria... de cómo mafioso y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. Debate, Bogotá.
- López, Andrés (2008). Narcotráfico: las múltiples dimensiones del problema. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Marín, Diego Alejandro y Martínez, Julio Jaramillo (1991). *De la barra a la banda. Estudio analítico de la violencia juvenil en Medellín*. El propio bolsillo, Medellín.
- Medina, Gilberto (2006). *Historia sin fin. Las milicias en Medellín en la década de los noventa*. Instituto Popular de Capacitación, Medellín.
- OSHM (2012). *Control Territorial y Resistencia. Una lectura desde la seguridad humana*. Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. Universidad de Antioquia, Personería de Medellín e Instituto Popular de Capacitación. Medellín.
- Personería Municipal de Itagüí (2014). Información suministrada a través de oficio con radicado 20140411 del 18 de febrero del 2014.
- Quijano, Aníbal (1998). *La economía popular y sus caminos en América Latina*. Mosca, Azul.
- Revista Semana (2013). “Calculan en 8.000 millones de dólares el lavado de dinero en el país”. [En línea:] <http://www.semana.com/nacion/articulo/calculan-unos-8000-millones-dolares-lavado-dinero-pais/243851-3>. (Consultado el 12 de marzo del 2015).
- Riaño, Pilar (2000). “La memoria viva de las muertes. Lugares e identidades juveniles en Medellín”. En: *Análisis político*, N.º 41, pp. 23-40.
- (2007). *Habitantes de la memoria. Jóvenes y violencia en Medellín, Colombia (1985-2000)*. ICANH, Bogotá.

- Romero, Mauricio (2000). "Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia". En: *Boletín del Instituto de Estudios Andinos*, N.º 3, pp. 331-357.
- (2007). "Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir". En: Sánchez, Gonzalo y Peñaranda, Ricardo (eds.), *Pasado y presente de la Violencia en Colombia*. La Carreta histórica, Medellín, pp. 407-433.
- Salazar, Alonso y Jaramillo, Ana (1992). *Medellín, las subculturas del narcotráfico*. Cinep, Bogotá.
- Secretaría de Gobierno Municipio de Itagüí (2014). Información suministrada a través de oficio con radicado 37084 del 2 de octubre del 2014.
- Serrano, Alfredo (2009). *Paracos*. Debate, Bogotá.
- Silva, Rosinaldo (2004). "Narcotráfico y economía ilícita: las redes del crimen organizado en Río de Janeiro". En: *Revista Mexicana de sociología*, año 66, pp. 141-186.
- Thoumi, Francisco (1999). "La relación entre corrupción y narcotráfico: un análisis general y algunas referencias a Colombia". En: *Revista económica de la Universidad del Rosario*, vol. 2, pp. 11-33.
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) (2014). Información suministrada a través de oficio con radicado 201460202711192 del 9 de julio del 2014.
- Verdad Abierta (2007). *La historia del Bloque Héroes de Granada*. [En línea:] <http://www.verdadabierta.com/victimarios/417-bloque-heroes-de-granada->. (Consultado el 8 de marzo del 2015).
- (2008). "Don Berna", *Diego Fernando Murillo Bejarano*. [En línea:] <http://www.verdadabierta.com/la-historia/715-perfil-diego-fernando-murillo-bejarano-alias-don-berna>. (Consultado el 3 de marzo del 2015).